

Señor

JUEZ CONSTITUCIONAL - VELEZ SANTANDER (Reparto)

E.

S.

D.

Asunto: **ACCION DE TUTELA**

YORGIN HARVEY CELY OVALLE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 91.015.156, con domicilio y residencia en la ciudad de Barbosa (Santander) y actuando en nombre propio, acudo respetuosamente para promover **ACCION DE TUTELA**, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991 y 1382 de 2000, a efectos de que se proceda al reparto y judicialmente se me conceda la protección de los Derechos fundamentales de rango Constitucional que considero vulnerados por la **ORGANIZACIÓN ELECTORAL** conformada por (i) Consejo Nacional Electoral, (ii) Registraduría Nacional Del Estado Civil y (iii) Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander.

La acción Constitucional que impetro se sustenta en los sucesivos acápite.

1. HECHOS

1.1 El día 27 de octubre de 2019 se realizaron en todo el territorio nacional, incluido el municipio de Barbosa (Santander), las elecciones de autoridades locales tendientes a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.

1.2 El día 7 de noviembre de 2019 mediante formulario E-26ALC de fecha 7 de noviembre de 2019, la Comisión Escrutadora Municipal de Barbosa (Santander) declaró la elección de alcalde, para el período 2020 a 2023, en cabeza del ciudadano Víctor Manuel Camacho Camargo.

1.3 El día 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2019, respectivamente radiqué ante los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander, derecho de petición en los siguientes términos:

"De manera respetuosa y por corresponder al ámbito de competencia, acudo a su instancia en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 Superior y desarrollado mediante la ley estatutaria 1755 de 2015 para que se sirvan ordenar a quien corresponda por razón de sus funciones el suministro o expedición de copia simple de los formularios electorales E-11^{ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES} correspondientes a todas las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral del municipio de Barbosa (Santander), a fin de poder ejercer en mi condición de candidato a la alcaldía municipal en las elecciones de autoridades locales celebradas el 27 de octubre de 2019, la acción pública de anulación electoral ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento de Santander, con base en la

causal séptima del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, para interponer la demanda de nulidad se requiere advertir al juez de forma individual (a) los ciudadanos que participaron en el debate electoral y (b) que no tienen residencia electoral en el respectivo municipio, por lo que el documento electoral idóneo para acceder a la administración de justicia es el denominado formulario E-11 que se exige. Sobre dicha circunstancia, la jurisprudencia ha señalado que:

"(...) La violación de la regla impuesta en el artículo 316 Constitucional, puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía. Así mismo, de ha considerado que el trasteo de votos también puede enmarcarse dentro del supuesto de hecho de la causal de nulidad de que trata el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo [Hoy contemplada autónoma, literal y expresamente en el numeral 7º del artículo 275 de la ley 1437 de 2011]. En tal contexto, es claro que la existencia de una irregularidad, según la cual en la elección de una autoridad local votan personas no residentes en la respectiva circunscripción electoral, permite inferir que los votos por ellas depositados y los registros que los consignan no corresponden a la realidad electoral, en cuanto provienen de una actividad ilegítima consistente en falsear la residencia electoral de quienes actuaron como electores. Con todo, la interpretación del artículo 316 de la Constitución Política permite inferir que la nulidad de la elección por trasteo de votos solo se configura si se demuestran los siguientes supuestos: 1) Que los inscritos no residan en el Municipio donde se inscribieron para las elecciones. 2) Que los inscritos ciertamente votaron en las elecciones, y 3) Que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final, pues de lo contrario, la nulidad del voto resulta inocua."

Concordante con el precedente jurisprudencial, el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad administrativa en esta materia y para responder al acceso a la información y garantías del debido proceso administrativo electoral, profirió la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019, estableciendo expresamente en el artículo segundo de la parte resolutive, lo siguiente:

"PUBLICACION DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA: En cumplimiento del artículo 41 de la ley 1475 de 2011, una vez concluya el escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E-14 y **formulario E-11**. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente." (Negrilla y subrayo fuera de texto)

En consecuencia y considerando que a la fecha no se evidencia la publicación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de las imágenes y/o los archivos del formulario E-11 del municipio de Barbosa (Santander), invoco el suministro de la referida información documental dentro los términos de ley, para de esta manera

proteger los derechos Constitucionales de i) petición, ii) debido proceso, iii) acceso a la administración de justicia y iv) elegir y ser elegido. (...)”.

1.4 El día 11 de diciembre de 2019 mediante oficio 002702 el Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil, Roque Alirio Martínez Santos emitió respuesta al precitado derecho de petición en los siguientes términos:

“En atención a su petición presentada bajo el radicado interno NO. 3077 y 3107 en este Despacho, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

1. De conformidad a lo estipulado en el Artículo 18 de la ley 712 de 2014: “El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado, fundamento constitucional que ordenan los artículos 2.4 y 1.3 de la ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Sentencia C-1011 de 2008 información sensible.

De otro lado se negará la entrega del formulario E-10 y E-11 en atención a la reserva legal contenida en el artículo 213 del decreto 2241 de 1986, Código Electoral. Inciso segundo, que enuncia: “Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros. Tiene carácter de reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y formula dactiloscópica.

De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría.

Es importante precisar que en ningún caso podrán ser entregados los archivos de inscripción, ni de manera física, fotocopiado, escaneado, filmico, magnético o cualquier otro medio electrónico con los nombres y números de cédulas de los inscritos, o del Censo Electoral de la correspondiente circunscripción vigente a los peticionarios, a diferencia de las autoridades investigativas o entes de control que adjunten la respectiva orden judicial, Acto Administrativo o Auto equivalente. (...)”.

2. DERECHOS VULNERADOS

Del orden Constitucional y objeto de protección por vía de tutela a razón de fundamentales y por conexidad, se invocan de la Carta Política de Colombia, los siguientes:

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista.

ARTICULO 2. El fin esencial de estado involucra la facilitación de participación en la vida política de la nación y en las decisiones que los afectan.

ARTICULO 3. La soberanía reside en el pueblo, del cual emana el poder público, representado en los ciudadanos que participaron en las elecciones de autoridades locales.

ARTÍCULO 29. El debido proceso aplica en toda actuación y ante toda autoridad, bien sea judicial o administrativa.

ARTICULO 40. Por ejercer el derecho fundamental de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que posibilita el derecho de elegir y ser elegido.

ARTÍCULO 229. Dispone categóricamente que se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.1 De la Acción de Tutela

La acción de tutela se define como el mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

Luego entonces, la tutela procede cuando el ciudadano interesado no dispone de otro medio de defensa y que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

3.2 Del Derecho Fundamental Al Debido Proceso

El debido proceso emerge como un derecho fundamental contenido en la Carta Constitucional, que reconoce a los ciudadanos la posibilidad de presuponer la seguridad jurídica cuando se encuentre incurso en una actuación administrativa o proceso judicial ante alguna autoridad del Estado.

El cumplimiento estricto de los procedimientos es una de las bases sustanciales del debido proceso, y por tal razón, la Constitución estableció expresamente que se deben observar con la rigurosidad y fundamento Constitucional que se determine, siendo el artículo 29 el que de manera expresa señala los lineamientos esenciales del mismo, y a partir del cual toda persona cuenta con unas condiciones sustanciales y procedimentales que le garantizan la protección de sus derechos, y permiten de la misma manera hacer efectivo el derecho material.

La Honorable Corte Constitucional en providencia de amparo, señaló sobre el particular lo siguiente:

"La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y diligencias, como se deducía de los términos empleados por la ley 153 de 1887.

El debido proceso no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo.

En el Título "De los principios fundamentales" de la Constitución está incluido el artículo 2 que señala como fin esencial del Estado la efectividad de los principios. En el artículo 228 se establece la prevalencia del derecho sustancial, en el artículo 229 de la C. P. se consagra el acceso a la administración de justicia, en el artículo 230 se habla del imperio de la ley y en el artículo 29 se desarrolla el debido proceso.

Pero esta posición lleva a un planteamiento más de fondo: el debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela."¹

Así entonces, el respeto al debido proceso tendrá en consecuencia, la plena aplicación en todas las actuaciones de la administración pública, en las que la persona considera que sus derechos han sido conculcados, y para ello puede reclamar por su respeto, con la tranquilidad de que se acatarán las formas propias de cada juicio, permitiendo en consecuencia, la efectividad de los derechos fundamentales y la realización del derecho material.

3.3 Del Derecho Fundamental A Elegir Y Ser Elegido

El derecho fundamental de participación democrática encuentra su base constitucional en los artículos 1 y 2 de la Carta, que define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, y en el que consagra que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, asuntos que se desarrollan en el artículo 40 de la Constitución, así: *"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,*

¹ Corte Constitucional - Sentencia T-280 de 1998

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido"; que está consagrado, a su vez, como derecho fundamental.

En efecto, el derecho a elegir y ser elegido que se garantiza en el artículo 40 de la Constitución Política, constituye una manifestación expresa de la calidad activa del ciudadano, y forma parte del conjunto de derechos y deberes de las personas en su relación con el poder político, como partícipes de la organización del Estado, mediante los procesos de elección.

Este derecho se integra al principio democrático que la Constitución declara y protege, el cual, en voces de la Corte Constitucional, es universal y expansivo:

*"Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción."*²

En este contexto, el derecho a elegir y ser elegido previsto en la Constitución Política de 1991, forma parte del concepto de democracia participativa, más amplio y moderno que el de la democracia representativa, de manera que el voto ciudadano cobra una especial importancia y dimensión, en cuanto manifestación de la libertad individual y como una forma de contribución a la formación de la voluntad política y al buen funcionamiento del sistema democrático, sujeto a las condiciones fijadas en la Constitución y la ley, lo que implica que bien sea como elector o candidato, deberán observarse las reglas para acudir a las votaciones y participar en cualquiera de tales calidades, así como las que el mismo ordenamiento establece para el control administrativo y judicial de los actos de elección, pues todas ellas, en su conjunto y no de forma aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los principios de participación democrática previstos en la Constitución.

En la Sentencia C-955 de 2001, la Corte indicó al respecto:

"El artículo 40 de la Constitución Política prescribe que elegir y ser elegido constituyen dos de los derechos políticos derivados de la calidad de ciudadano. La condición de sujeto activo del sufragio está determinada por el derecho que se tiene a ejercer el voto, mientras que la condición pasiva consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado."

² Corte Constitucional - Sentencia C-089 de 1994

Ahora bien, la vinculación de la condición activa con la pasiva del derecho político derivado del artículo 40, se realiza a través del sufragio. El sufragio es el mecanismo por medio del cual, los electores manifiestan su voluntad encaminada a elegir a uno de los candidatos como su representante.

No obstante, el ejercicio del sufragio se encuentra sometido a ciertas reglas que buscan preservar el orden en los procesos electorales y conservar el control de los comicios por parte del Estado."

Por lo tanto, el resultado de la acción de nulidad electoral a través del control judicial de los actos de elección, se integra al conjunto de medios e instrumentos de participación e intervención ciudadana directamente relacionados con el derecho de elegir y ser elegido, que es objeto de protección fundamental en la Carta Política.

3.4 Del Derecho Fundamental Al Acceso A La Administración De Justicia

El artículo 229 de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho de acceso a la administración de justicia. Este derecho tiene íntima relación con el derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 289 Superior, hasta el punto de que es conexo a este último.

En efecto, el derecho a acceder a la administración de justicia busca que el Estado despliegue la actividad judicial, respondiendo, a través del proceso, a las pretensiones que se le formulan, las que deben resolverse con base en el sistema de fuentes establecido y de manera independiente, imparcial y en un término razonable, mediante una decisión de fondo motivada, salvo que concurren causales legítimas de inadmisión al tenor de los artículos 228, 229 y 230 de la Carta Magna.

Luego entonces, el artículo 229 de la Constitución Política impone la correcta aplicación de la Constitución y la ley para la resolución de casos sometidos a la competencia de las autoridades judiciales, para lo cual requiere como elemento sustancial la concurrencia de la inmediación documental probatoria dentro del expediente, a fin de que demuestre la existencia de la causal invocada y por ende obtener la resolución positiva del daño antijurídico que se demanda.

La Corte Constitucional al respecto a sentenciado:

"El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus

habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia. En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta. En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho. En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. **Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.**"³

Ahora bien, para hacer eficiente el derecho fundamental del debido proceso tendiente a garantizar el acceso a la administración de justicia, la jurisprudencia Constitucional ha sentenciado que:

*"La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP, art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP, art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP, arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP, art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no, es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP, art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP, art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP, art. 83)."*⁴

3. CONSIDERACIONES - RELACIÓN JURIDICO FÁCTICA

Se invoca la vulneración de los referidos derechos fundamentales, a razón de la respuesta emitida⁵ al derecho fundamental de petición⁶ por la autoridad electoral

³ Corte Constitucional - Sentencia T-293 de 2013

⁴ Corte Constitucional - Sentencia T-079 de 1993

⁵ Ver numeral 1.4

representada por el Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander, considerando los siguientes aspectos puntuales:

3.1 Que en concordancia con los precedentes jurisprudenciales, el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad administrativa en esta materia y para responder al acceso a la información y garantías del debido proceso administrativo y acceso a la justicia electoral, profirió la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019⁷, estableciendo expresamente en el artículo segundo de la parte resolutive, lo siguiente:

"PUBLICACION DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA: En cumplimiento del artículo 41 de la ley 1475 de 2011, una vez concluya el escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E-14 y **formulario E-11**. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente." (Negrilla y subrayo fuera de texto).

En efecto, es con fundamento en el acto administrativo emanado del órgano electoral que se solicitó la información, en la medida que no se ha efectuado la publicación dispuesta en la resolución que tiene presunción de legalidad, y por tal razón, debe ser acatada por los funcionarios electorales y específicamente por los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander, en el sentido de publicar a la mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del formulario E-11.

3.2 Que negar el suministro de la referida información documental, so pretexto de invocar normas contenidas en el estatuto electoral que data de 1986, es decir, anterior a la vigencia de la Constitución de 1991 e invocando el artículo 18 de la ley 712 de 2014 –protección de datos–, contradice también lo decantado en la doctrina electoral en relación con la publicidad del formulario E-11 a través de la conclusión consignada en el concepto con radicado 2629 de 2014, así:

"De lo expuesto en la parte considerativa de este concepto, se contesta al peticionario que una vez revisadas las disposiciones concernientes a la materia, la posibilidad de solicitar información a una autoridad pública es una modalidad de derecho de petición, en virtud de la cual toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre y cuando dichos documentos no tengan carácter reservado, conforme a la Constitución o a la ley.

En tratándose específicamente del caso que nos ocupa, el Formulario E-11, Acta de Instalación y Registro General de Votantes, por no encontrarse sujeto a

⁶ Ver numeral 1.3

⁷ "Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral"

reserva puede ser consultado en los términos que establece el C.P.A.C.A. y demás normas concordantes”.

Se debe advertir que en los fundamentos expuestos en la parte considerativa del referido concepto y luego del análisis jurídico de rigor sobre las normas jurídicas que gobiernan la materia, el órgano electoral considero:

“Vistas las anteriores consideraciones, el Consejo Nacional Electoral considera que por no gozar de reserva legal expresa, el Formulario E-11 es de público conocimiento por tanto puede ser consultado en cualquier momento dado que no registra datos biográficos, formula dactiloscópica, información específica del votante o filiación tal que con su puesta a disposición del público se pueda llegar a vulnerar de alguna manera precepto Superiores relacionados con la intimidad de los electores registrados, toda vez que en el mismo se consignan únicamente datos que permiten identificar al sufragante, como el número de cédula de ciudadanía, nombres, apellidos y sexo, indispensables para garantizar transparencia en los procesos de votación”

3.3 Que el acceso a la información electoral contenida en el Acta de Instalación y Registro General de Votantes / Formulario E-11, tiene un carácter determinante para poder acudir a la jurisdicción contencioso electoral invocando la acción de nulidad electoral con base en la causal denominada trashumancia electoral, dado que el juez electoral para la procedencia de la acción judicial exige la individualización de los ciudadanos que efectivamente ejercieron el derecho al voto en las elecciones de la circunscripción electoral que se pretenden anular, por lo que el único instrumento probatorio idóneo es el formulario E-11, atendiendo que en su estructura se encuentra previamente definido el número de cédula de quien puede sufragar en la respectiva zona, puesto y mesa, sino también el espacio para que el jurado de votación, al confrontar el cupo numérico de identificación con la persona que acude a votar, diligencie el correspondiente nombre y apellido, como mecanismo de identificación previo a ejercer el derecho a elegir.

En efecto, el máximo órgano judicial en materia electoral sobre el particular ha sentenciado:

*“Actualmente, la trashumancia electoral está consagrada en el numeral 7 del artículo 275 del C.P.A.C.A. como causal autónoma de nulidad, según la cual “[l]os actos de elección o de nombramiento son nulos (...) cuando: (...) 7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.” Sin embargo, los requisitos para su configuración siguen siendo aquéllos determinados por la Sección desde 1999. Ahora bien, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 161 Ibídem, la Sección ha reconocido que frente a esta causal de nulidad no se debe agotar el requisito de procedibilidad previsto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política. Con base en el anterior desarrollo normativo y jurisprudencial, la Sección concluyó en la sentencia de 9 de febrero de 2017 que actualmente la causal de nulidad de los actos electorales por motivo de trashumancia se rige por las siguientes reglas: **Para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) que personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que éstas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron***

incidencia en el resultado de la contienda electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del C.P.A.C.A.; La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución ponderada de los votos nulos y el examen del cargo no está sometido a la verificación del requisito de procedibilidad de que tratan los artículos 237 de la C.P. y 161.6 del C.P.A.C.A.”⁸

En consecuencia, pretermitir el acceso a dicha información probatoria, afecta los derechos fundamentales invocados en la presente acción de amparo, máxime si se considera que la oportunidad legal para acudir a la jurisdicción contenciosa es dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición del acto de declaratoria de elección que se pretende nulitar, de conformidad con el literal a) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.4 Que para las elecciones de autoridades locales celebradas el 27 de octubre de 2019, en el municipio de Barbosa (Santander) se desarrolló la inscripción de cédulas de ciudadanía durante el lapso comprendido entre el 27 de octubre de 2018 al 27 de agosto de 2019, en la cual hubo una inscripción de 2.439 ciudadanos, con una diferencia porcentual del 85.40% en relación con las inscripciones de 2015. Debido a esta situación el Consejo Nacional Electoral adelantó la investigación administrativa y con fundamento en los criterios de decisión adoptados, profirió la Resolución No. 5010 del 18 de septiembre de 2019 por medio de la cual resolvió dejar sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía realizada en el municipio de Barbosa – Santander, como consecuencia de haberse acreditado sumariamente la no residencia electoral de 1.381 ciudadanos, sobre los cuales se hace imperioso constatar si efectivamente fueron excluidos del censo electoral del municipio de Barbosa (Santander) o si en su defecto se les permitió votar, en atención al interregno existente entre la decisión de policía administrativa emanada del Consejo Nacional Electoral y la fecha de las elecciones, es decir, menos de un mes calendario, esto si se tiene en cuenta que la resolución fue expedida el 18 de septiembre y contra la misma procedían los recursos de ley.

Sobre la competencia funcional y sus consecuencias legales la jurisprudencia ha señalado que:

“El Consejo Nacional Electoral, entonces, debe dejar sin efecto la inscripción para las votaciones que hayan de realizarse para la elección de autoridades municipales, cuando el inscrito no resida en el respectivo municipio, para evitar que vote.

Desde luego que si así no ocurre no por ello puede entenderse autorizado para votar quien no resida en el municipio de que se trate, por la expresa prohibición del artículo 316 de la Constitución, y el voto cumplido contra esa prohibición es nulo. No obstante, siendo que lo legalmente protegido es la elección misma, ha de entenderse que es nula y nulo también el acto que la declare, cuando el número de votos nulos

⁸ Consejo De Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta – M. P. Lucy Jeannette Bermúdez - Bogotá, D.C., 23 de febrero de 2017 - Radicación 68001-23-33-000-2016-00076-02 - Asunto: Nulidad Electoral – Fallo de segunda instancia

sea determinante de la elección, pues en caso contrario la nulidad del voto sería inocua. Solo así se daría eficacia al voto válidamente emitido, y ese es criterio de interpretación de las disposiciones electorales, según lo establecido en el artículo 1.º, numeral 3 del Código Electoral"

En suma, sólo cuando se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral dejará sin efecto la inscripción para evitar que vote, en tanto cuanto que el voto cumplido contra esta disposición es nulo y por lo mismo es indispensable poder acceder a la información que contiene los ciudadanos que siendo declarados trashumantes o que no teniendo residencia electoral en el municipio de Barbosa (Santander), ejercieron el derecho al voto.

3.5 Que en el municipio de Barbosa (Santander) para las elecciones de autoridades locales de 2019 y particularmente para elegir alcalde municipal votaron en 74 mesas instaladas un total de 16.955 ciudadanos de los 25.055 habilitados para sufragar, debiendo resaltar la diferencia mínima entre el candidato electo y el segundo lugar, con un porcentaje de votación del 28.93% vs 28.46%. Esto dado que el ciudadano Víctor Manuel Camacho Camargo obtuvo 4.802 votos contra 4713 votos del ciudadano Yorgin Harvey Cely Ovalle, es decir, que gana por 89 votos, lo que impone la necesidad de verificar si los resultados depositados en las urnas corresponden a la verdadera voluntad popular y que esta no se encuentre menoscabada e influida por votos de ciudadanos sin residencia electoral en el Municipio de Barbosa Santander.

La jurisprudencia Constitucional expresa sobre el particular:

*"Debe anotarse al respecto, que el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P art. 40), se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P art. 316), pues el Constituyente Colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con el fin esencial del estado (C.P art. 2), de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Así, la práctica de incluir en los censos electorales municipales a personas que no residen en el lugar, a fin de que estos votantes sean escrutados junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos, esta entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, al tenor del numeral 5º del artículo 265 de la Carta Política"*⁹.

Por todo lo expuesto y atendiendo que no es posible tener certeza sobre la efectividad de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral en el sentido de evitar que personas sin residencia electoral en el Municipio de Barbosa (Santander) hayan efectivamente participado e incidido en el precario resultado

⁹ Corte Constitucional - Sentencia T-135 de 2000

derivado en una mínima diferencia entre el ganador y quien obtuvo la segunda votación, es indispensable poder acceder al registro de sufragantes, Formulario E-11, y de esta manera acudir en cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisdicción contenciosa electoral a efectos de individualizar aquellos votantes, indicando zona, puesto y mesa donde concurrieron a votar siendo declarados trashumantes o sin tener residencia electoral en el municipio de Barbosa (Santander).

4. PETICION

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones de derecho expuestas, respetuosamente solicito al Juez Constitucional, **CONCEDER TUTELA** al Derecho fundamental al **DEBIDO PROCESO, DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**, y los demás invocados por conexidad, a fin de que **ORDENE** a la Organización Electoral conformada por (i) el Consejo Nacional Electoral, (ii) la Registraduría Nacional Del Estado Civil y (iii) los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander, disponer las medidas tendientes a: **PUBLICAR** de manera inmediata las imágenes y los archivos planos del formulario E-11 “ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES de todas las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral del municipio de Barbosa (Santander), correspondiente a las elecciones realizadas el domingo 27 de octubre de 2019 o en su defecto **SUMINISTRAR** de manera inmediata copia del formulario E-11 “ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES de todas las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral del municipio de Barbosa (Santander), correspondiente a las elecciones realizadas el domingo 27 de octubre de 2019.

5. PRUEBAS

- 5.1 Copia simple de mi documento de identidad. (1 Folio)
- 5.2 Copia simple del derecho de petición incoado ante la Delegación Departamental de Santander solicitando el suministro de la información contenida en los formularios E-10 y E-11. (2 Folios)
- 5.3 Copia simple de la respuesta al derecho de petición, emanada de la Delegación Departamental de Santander. (2 Folios)
- 5.4 Copia simple de la Resolución No. 1706 de 2019 emanada del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios y el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral. (4 Folios)
- 5.5 Copia simple del concepto con radicado 2629 de 2014 proferido por el Consejo Nacional Electoral sobre publicidad de los formularios E-11. (8 folios)
- 5.6 Copia simple del Acta del Escrutinio Municipal de Alcalde de Barbosa (Santander) y declaratoria de elección - Formulario E-26 ALC. (2 Folios)

6. JURAMENTO

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, declaro bajo la gravedad de juramento que no he presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos ante otra autoridad.

7. MEDIDA PROVISIONAL

Con fundamento en los hechos que motivan la presente acción de tutela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, el termino para interponer las acciones constitucionales, el cual se vence el primer día hábil después de la vacancia judicial y la URGENCIA de acceder a la ADMINISTRACION DE JUSTICIA, solicito se acceda a mis pretensiones, a la mayor brevedad posible, y mientras se decide y dicta sentencia, provisionalmente, con el debido respeto solicito se ordene a las entidades accionadas permitir la toma de fotografías o en su defecto la toma manual de los datos (Nombres, apellidos y número de cedula) de los electores, debido a que es renuente la negativa de la registraduría a la entrega de la información, incluso en forma manual, debido a que hicimos presencia en las instalaciones de la registraduría y volvieron a negar la solicitud.

8. NOTIFICACIONES

Accionante: Yorgin Harvey Cely Ovalle
Correo electrónico: yorcel@hotmail.com
Dirección: Carrera 8 No. 7-78
Ciudad: Barbosa (Santander)

Autoridades Accionadas:

Consejo Nacional Electoral: Hernán Penagos Giraldo – Magistrado Presidente
Correo electrónico: cnenotificaciones@cne.gov.co
Dirección: Av. Calle 26 No. 51-50 Piso 6
Ciudad: Bogotá D.C.

Registraduría Nacional del Estado Civil: Alexander Vega Rocha – Registrador Nacional del Estado Civil
Correo electrónico: notificacionjudicial@registraduria.gov.co
Dirección: Av. Calle 26 No. 51-50 Piso 5
Ciudad: Bogotá D.C.

Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander: Roque Alirio Martínez Santo
Correo electrónico: gerenciath@registraduria.gov.co
Dirección: Calle 35 No. 17-56 Piso 11
Ciudad: Bucaramanga – Santander

Del señor Juez Constitucional, suscribo,


YORGIN HARVEY CELY OVALLE
C.C. No. 91.016.156

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.015.156
CELY OVALLE

APELLIDOS
YORGIN HARVEY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1975

BARBOSA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

12-MAY-1993 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2701300-00139254-M-0091015156-20081218 0008353411A 1 24060181



RESOLUCIÓN No. 1706 de 2019
(08 de mayo)

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, los artículos 11 y 12 del Decreto Ley 2214 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al mandato constitucional el Consejo Nacional Electoral tiene como atribución velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que según el numeral 2 del artículo 1 del Código Electoral, el escrutinio es público, según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales.

Que el artículo 265 constitucional dispone que el Consejo Nacional Electoral, de oficio, o por solicitud, tiene la atribución de revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.

Que el artículo 3 de la ley 1712 de 2014 establece que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la ley.

Igualmente establece que conforme al principio de transparencia toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en la ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Que el artículo 6 de la ley 610 de 2000 dispone que

"se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías."

Que según el artículo 4 de la Ley 610 de 2000 "la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral.

conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.
PARAGRAFO 1o. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad."

Que el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que para que se cumpla con el derecho al debido proceso, todas las actuaciones de las comisiones escrutadoras deberán hacerse en audiencia pública.

Que la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, en el marco de las elecciones a Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, emitió su informe final con 32 recomendaciones entre las cuales se hace referencia a la transparencia en el acceso a la información y las garantías al debido proceso.

Que en el segundo informe de la Misión de Observación Electoral, sobre elecciones de Congreso y consultas interpartidistas populares resalta que del 76% de los puestos de votación observados por la MOE se encontraron equipos de identificación biométrica, llamando la atención sobre el hecho de que el 62% de los puestos observados con identificación biométrica, todas las personas no pasaban por este registro, permitiendo la posible suplantación de votantes¹.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: USO OBLIGATORIO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS COMISIONES ESCRUTADORAS: Con el fin de velar por la transparencia, eficacia y eficiencia, los escrutadores deberán hacer uso de las herramientas tecnológicas que la Registraduría Nacional del Estado Civil y/o el Consejo Nacional Electoral, en su calidad de secretario técnico y responsable del apoyo logístico y administrativo del proceso electoral, ha puesto a disposición de quienes participan del proceso de escrutinio.

En particular se hace referencia a los equipos para escanear o digitalizar las actas E14 de claveros, así como el software de escrutinio en el que se debe registrar las votaciones, el detalle de las modificaciones, los recuentos; además de los sistemas de autenticación que se implementen, como los lectores biométricos, por enunciar los principales.

PARÁGRAFO: La celeridad del proceso no podrá ser argumento válido para omitir la digitalización y proyección de las actas E14 de claveros.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA: En cumplimiento del artículo 41 de la ley 1475 de 2011, una vez concluya el escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E14 y formulario E11. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitará un canal especial, para que los auditores de los partidos y movimientos políticos puedan acceder al

¹ <https://moe.org.co/segundo-informe-de-observacion-electoral-moe/>

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral.

archivo plano o en formato de datos abiertos de los resultados parciales y finales del denominado pre-conteo, antes que continúe la audiencia de escrutinio el lunes siguiente a las elecciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los boletines expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante el denominado pre-conteo, no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS DE ESCRUTINIO: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la ley 1475 de 2011, las comisiones escrutadoras entregarán a un testigo por partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en medio físico o magnético de forma parcial y final los siguientes documentos en archivo plano o en formato de datos abiertos, los cuales serán autenticables con las medidas de seguridad de la información del caso:

1. Acta parcial y del acta la final de escrutinios.
2. Acta general de escrutinios.
3. Log del sistema operativo.
4. Log de la base de datos.

PARÁGRAFO: Las actas generales de escrutinios deberán contener de manera detallada la siguiente información:

1. Mesas con recuento.
2. Detalle de la votación modificada, votación inicialmente registrada y su modificación.
3. Si hubo nivelación o balanceo de la mesa.
4. Constancia de que los escrutadores hicieron o aprobaron el escrutinio o la modificación de las votaciones.
5. Relación de las reclamaciones presentadas y su decisión, las cuales deberán ser anexadas.

ARTÍCULO CUARTO: GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ELECTORAL: Con el fin de garantizar el debido proceso administrativo electoral, ninguna actuación de la Comisión será efectuada por fuera de audiencia pública ni de sus lapsos de sesión, ningún recurso podrá ser resuelto por auto de trámite y el de apelación deberá ser tramitado ante el superior, quien decidirá sobre su procedencia y solución de fondo.

El trámite de las actuaciones que deban surtir en la segunda instancia no se iniciará hasta tanto no haya terminado en su totalidad la instancia anterior y se hayan publicado las actas y los archivos planos respectivos de los documentos relacionados en artículo tercero de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, los escrutadores leerán la totalidad de los datos electorales de la respectiva comisión y otorgarán como mínimo un (1) día hábil para la presentación de reclamaciones, recursos o solicitudes contado a partir del día siguiente a la publicación o entrega de los archivos planos del acta E24 del respectivo escrutinio. Las peticiones antes enunciadas serán resueltas en audiencia mediante actos de fondo susceptibles de recursos.

ARTÍCULO QUINTO: FORMULARIO E-11, ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES: La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de todas las medidas logísticas y administrativas necesarias para incorporar espacios en el formulario E-11, para que los votantes firmen ese documento al momento de ejercer el derecho al voto.

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral.

Igualmente se habilitará un espacio en el formulario E-11 para que los jurados tomen la huella dactilar de todos los votantes que quieran ejercer el derecho al voto.

La omisión por parte de los jurados de mesa a solicitar de los votantes la firma y la huella, será informada a las autoridades competentes para las investigaciones a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICIDAD DEL ESCRUTINIO: Los asistentes a las audiencias de escrutinios, incluidas las organizaciones políticas que avalaron candidatos, podrán filmar y divulgar total o parcialmente el desarrollo de los escrutinios.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las disposiciones de la presente Resolución, deberán ser incorporadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los manuales que adopte para jurados de mesa, testigos electorales y los demás que en desarrollo de sus competencias expida.

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR por medio de la subsecretaría de la corporación el contenido de esta resolución al Ministerio del Interior, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los Partidos, Movimientos Políticos, Grupos Significativos de Ciudadanos, a la Misión de Observación Electoral, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

ARTÍCULO NOVENO. PUBLICAR en presente acto administrativo en los términos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Expedida en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).


HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO
Presidente


PEDRO FELIPE GUTIERREZ SIERRA
Vicepresidente

Aprobado en Sala Plena del 08 de mayo de 2019

Revisó: Rafael Antonio Vargas Gonzalez, Asesoría Secretaria General

Proyecto: SBP

Ausentes: H.M. Jaime Luis Lacouture

Al artículo quinto: Ausente: H.M. Jorge Enrique Rozo; Aclaración de Voto: H. M. Renato Rafael Contreras

Salvamento de Voto: H.M. Pedro Felipe Gutierrez

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RADICADO 2629 DE 2014

ASUNTO: CONSULTA SOBRE PUBLICIDAD DE
FORMULARIO E-11

PETICIONARIO: OSWALDO BLANCO

MAGISTRADO PONENTE: EMILIANO RIVERA BRAVO

FECHA DE APROBACION: 08 DE JULIO DE 2014.

1. LA CONSULTA

Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 8 de abril de 2014 con el No. 2629-14, el ciudadano OSWALDO BLANCO formula la siguiente consulta:

"Acudo a sus buenos oficios con el objeto de conocer de fondo a la aplicación de su normatividad y el acceso a los documentos públicos para la transcripción de los formularios de votantes E-11 diligenciados de los 490 puestos electorales de Bogotá, procedimiento que culmino el 9 de marzo de 2014, información que no es reservada.

Por tanto, reitero la intervención de CNE dentro de sus competencias de velar por el cumplimiento de las normas de emitir concepto interpretando las disposiciones legales mencionadas, con el objeto de tutelar mi derecho a la información pública"

2. COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

La Carta Política de 1991, le otorga a esta Corporación entre otras las siguientes facultades con relación a la actividad electoral y las materias a su cargo:

"ARTÍCULO 265. (Artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009) El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral

(...)

4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.

(...)

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Político y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

(...)"

Igualmente, la Ley 130 de 1994 "Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos" en su artículo 39 dispone además de las funciones que le confiere la Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente, "Emitir conceptos interpretando las disposiciones legales mencionadas".

3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

El Consejo Nacional Electoral, es competente para resolver las consultas que se formulen acerca de los asuntos que se encuentran a su cargo, en virtud de lo señalado en el artículo 23 de la Constitución Política, según el cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Este precepto constitucional ha sido desarrollado por el artículo 13 de la ley 1437 de 2011, el cual señala que mediante el ejercicio del derecho contenido en el mencionado artículo 23 se podrá, entre otras actuaciones, formular consultas.

El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹ establece:

¹Declarado inexecutable por la Sentencia C - 818 de 2011, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta 31 de diciembre de 2014 a fin de que Congreso expida la Ley

"Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por lo motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

*(...) Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular **consultas**, quejas, denuncias y reclamos o interponer recursos.*

(...)"

El artículo 14 de la norma precitada² se refiere al término para resolver las distintas modalidades de peticiones, en tratándose de las solicitudes mediante las cuales se eleva consulta, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, igualmente cabe resaltar que la normativa Superior prevé también en su artículo 28, que salvo disposición en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones relacionadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

3.2. DECRETO 2241 DE 1986

Sobre la materia, es necesario mencionar lo contemplado en el código electoral, **Artículo 1** *"El objeto de este código es perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas".* (Subrayado fuera del texto original)

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral y en general, todos los funcionarios de la organización electoral del país, en la interpretación y aplicación de las leyes, deben darle aplicación en sus actuaciones los siguientes principios rectores:

"(...)

2° Principio del secreto del voto y de la publicidad del escrutinio.

El voto es secreto y las autoridades deben garantizar el derecho que tiene cada ciudadano de votar libremente sin revelar sus preferencias.

El escrutinio es público, según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales".

En cuanto a los documentos electorales y su custodia esta norma prevé un sistema para su custodia de la siguiente manera:

***“ARTÍCULO 145.** Los documentos electorales se introducirán y guardarán en un (1) arca de tres (3) cerraduras o candados denominados arca triclave.*

***ARTÍCULO 146.** Las arcas triclaves irán marcadas exteriormente con el nombre del municipio al cual corresponden.*

Cuando el volumen de los documentos electorales lo haga indispensable, podrán utilizarse locales u oficinas que se acondicionarán como arcas triclaves.

***ARTÍCULO 147.** En las oficinas del Consejo Nacional Electoral, de las Delegaciones del Registrador Nacional del Estado Civil y de las Registradurías Distritales, Municipales y Auxiliares habrá arcas triclaves en las cuales se depositarán los documentos electorales que deban ser objeto de escrutinio.”*

3.3. LEY ESTATUTARIA 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

Como quiera que en el presente concepto lo que se busca es determinar la viabilidad de suministrar la información contenida en los documentos electorales, se pone en contexto lo referente al tratamiento de datos personales contenidos en las diferentes bases de datos y archivos de las entidades públicas y privadas.

***“Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.”*

De igual forma el artículo 5 de la normativa en mención, define lo que se configura como datos sensibles así:

***“Artículo 5°. Datos sensibles.** Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos*

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos."

4. CONSIDERACIONES

En el caso *sub examine* el ciudadano Oswaldo Blanco, formula consulta solicitando a esta Corporación emitir concepto interpretando las disposiciones concernientes a la publicidad del formulario E-11, para lo cual es pertinente abordar el tema partiendo de la noción que en materia electoral se tiene de tales documentos, así como las prerrogativas que trae el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la reserva y publicidad de la información que reposa en las diferentes entidades públicas y privadas en concordancia con la Ley estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos y derecho de información, con el fin de concluir sobre la naturaleza de los pliegos materia de la solicitud, indicando si gozan de carácter reservado o son de público conocimiento.

Al respecto, y con el ánimo de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de normalidad, existe una serie de mecanismos o instrumentos que desarrolló el legislador en el **Decreto 2241 de 1986**, a efectos de realizar unas elecciones transparentes entre los cuales se encuentran los llamados **documentos electorales**, siendo estos los medios probatorios por excelencia para realizar la verificación o contradicción entre los resultados del proceso electoral y la voluntad del elector, entre ellos el Formulario E-11 o Acta de Instalación y Registro General de Votantes materia de la presente consulta.

Ahora bien, la posibilidad de solicitar información a las diferentes entidades sean de carácter público o privado es una modalidad del derecho de petición, en virtud de la cual toda persona tiene derecho a consultar los documentos que allí reposan y a que se le expida copia de los mismos, siempre y cuando dichos documentos no tengan carácter reservado o vayan en contravía de Derechos Fundamentales conforme a la Constitución o a la ley, para lo cual es menester dilucidar en primer lugar las consideraciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Es así como la normativa mencionada contempla a partir del Artículo 24 lo relacionado a la solicitud de información y documentos reservados, indicando que sólo tendrán este carácter los sometidos a reserva por la Constitución o la ley, relacionando de manera expresa los siguientes:

"1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.

2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

3. Los amparados por el secreto profesional.

4. **Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas,** incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.

5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación". (Negrilla fuera del texto original.)

Por ende, no podría entregarse información en lo que respecta a lo señalado taxativamente en la norma precitada; y bajo este entendido no sería posible realizar dicha solicitud, caso en el cual se contempla en el artículo 25 del C.P.A.C.A el rechazo de las solicitudes de información por motivo de reserva que en todo caso debe: i) ser motivada indicando en forma precisa las disposiciones legales pertinentes, ii) notificarse al peticionario e iii) indicarse que contra la misma no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo 26 de la citada norma:

"(...)

"La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella."

Igualmente el Decreto 2241 de 1986, sobre la reserva de los documentos dice:

"Artículo 213. Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros.

Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica.

De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente.

Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría.

Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos."

En el mismo sentido, el legislador fijó un marco normativo garante de la protección del derecho a la intimidad, es así como **El Habeas Data se configura como el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, así como a obtener dicha información en concordancia con el artículo 20 de la Carta Política.**

El artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ubica en la categoría de los datos sensibles aquellos que afectan el Derecho a la intimidad o cuyo uso indebido pueda ser el detonante de discriminación ya sea porque revelan información como el origen racial o étnico, inclinación política, convicciones religiosas, filosóficas o que en materia electoral promueva intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, los cuales no podrían ser de público conocimiento si no en virtud de autorización expresa del Titular del derecho.

Vistas las anteriores consideraciones, el Consejo Nacional Electoral considera que por no gozar de reserva legal expresa, el Formulario E-11 es de público conocimiento por tanto puede ser consultado en cualquier momento dado que no registra datos biográficos, formula dactiloscópica, información específica del votante o filiación tal que con su puesta a disposición del público se pueda llegar a vulnerar de alguna manera preceptos Superiores relacionados con la intimidad de los electores registrados, toda vez que en el mismo se consignan únicamente datos que permiten identificar al sufragante, como el Número de Cédula de ciudadanía, nombres, apellidos y sexo, indispensables para garantizar transparencia en los procesos de votación.


5. CONCLUSIÓN

De lo expuesto en la parte considerativa de este concepto, se contesta al peticionario que una vez revisadas las disposiciones concernientes a la materia, la posibilidad de solicitar información a una autoridad pública es una modalidad del derecho de petición, en virtud de la cual toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre y cuando dichos documentos no tengan carácter reservado, conforme a la Constitución o a la ley.

En tratándose específicamente del caso que nos ocupa, el Formulario E-11, Acta de Instalación y Registro General de Votantes, por no encontrarse sujeto a reserva puede ser consultado en los términos que establece el C.P.A.C.A y demás normas concordantes.

Finalmente, cabe resaltar que la Constitución Política prevé también en su artículo 28, que salvo disposición en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones relacionadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Dada en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014).


PABLO GUILLERMO GIL DE LA HOZ
Presidente


IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Vicepresidenta


EMILIANO RIVERA BRAVO
Magistrado Ponente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES
27 DE OCTUBRE DE 2019
ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO MUNICIPAL
ALCALDE

E-26 ALC

Pág 1 de 2

DEPARTAMENTO 27-SANTANDER

MUNICIPIO 013-BARBOSA

En BIBLIOTECA ALEJANDRIA, a las 2:37 PM el día 07 de noviembre de 2019, terminado el escrutinio Municipal y hecho el cómputo de los votos para cada uno de los candidatos, se obtuvo el siguiente resultado:

CÓD	CANDIDATO	PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO	VOTOS	VOTOS EN LETRAS
001	YORGIN HARVEY CELY OVALLE	COALICIÓN DESPIERTA BARBOSA	4713	CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE
002	JUAN CARLOS SANCHEZ ACUÑA	PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES	36	TREINTA Y SEIS
003	JULIAN ENRIQUE BECARIA SANCHEZ	COALICIÓN RENOVACIÓN	2776	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
004	MARCO ALIRIO CORTES TORRES	PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE	3960	TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA
005	VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO	COALICIÓN BARBOSA UNA NUEVA HISTORIA	4802	CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS

TOTAL POR CANDIDATOS	16287	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
VOTOS EN BLANCO	302	TRESCIENTOS DOS
VOTOS VÁLIDOS	16589	DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
VOTOS NULOS	235	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
VOTOS NO MARCADOS	131	CIENTO TREINTA Y UNO
TOTAL GENERAL	16955	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO


RICARDO ALONSO ARCINIEGAS
GUTIERREZ


EMILCE GOMEZ OCHOA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


DARIO MONROY FONSECA

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA



Fecha de Generación: jueves 07 noviembre de 2019 a las 3:10 PM

DEPARTAMENTO 27-SANTANDER

MUNICIPIO 013-BARBOSA

En BIBLIOTECA ALEJANDRIA, a las 2:37 PM el día 07 de noviembre de 2019, terminado el escrutinio Municipal y hecho el cómputo de los votos para cada uno de los candidatos, se obtuvo el siguiente resultado:

DECLARATORIA DE ELECCIÓN

En consecuencia se declara electo como ALCALDE del departamento de SANTANDER, municipio de BARBOSA para el periodo 2020-2023 al siguiente candidato:

NOMBRE DEL CANDIDATO	PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO	CÉDULA
VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO	COALICIÓN BARBOSA UNA NUEVA HISTORIA	79780756

En concordancia con el Artículo 25, de la ley 1909 del año 2018, El candidato(a) YORGIN HARVEY CELY OVALLE, tendrá derecho personal a ocupar, en su orden, una curul al CONCEJO del municipio BARBOSA-SANTANDER.


RICARDO ALONSO ARCINIEGAS
GUTIERREZ

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


EMILCE GOMEZ OCHOA


DARIO MONROY FONSECA

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA



Bucaramanga, 3 de diciembre de 2019

Señores

DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Departamento de Santander

Calle 35 No. 17-56 Piso 11

Ciudad

Ref. Derecho de Petición

Cordial saludo:

De manera respetuosa y por corresponder al ámbito de competencia, acudo a su instancia en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 Superior y desarrollado mediante la ley estatutaria 1755 de 2015⁽¹⁾ para que se sirvan ordenar a quien corresponda por razón de sus funciones el suministro o expedición de copia simple de los formularios electorales E-11-ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES- correspondientes a todas las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral del municipio de Barbosa (Santander), a fin de poder ejercer en mi condición de candidato a la alcaldía municipal en las elecciones de autoridades locales celebradas el 27 de octubre de 2019, la acción pública de anulación electoral ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento de Santander, con base en la causal séptima⁽²⁾ del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, para interponer la demanda de nulidad se requiere advertir al juez de forma individual (a) los ciudadanos que participaron en el debate electoral y (b) que no tienen residencia electoral en el respectivo municipio, por lo que el documento electoral idóneo para acceder a la administración de justicia es el denominado formulario E-11 que se exige. Sobre dicha circunstancia, la jurisprudencia ha señalado que:

"(...) La violación de la regla impuesta en el artículo 316 Constitucional, puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía. Así mismo, de ha considerado que el trasteo de votos también puede enmarcarse dentro del supuesto de hecho de la causal de nulidad de que trata el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo [Hoy contemplada autónoma, literal y expresamente en el numeral 7º del artículo 275 de la ley 1437 de 2011]. En tal contexto, es claro que la existencia de una irregularidad, según la cual en la elección de una autoridad local votan personas no residentes en la respectiva circunscripción electoral, permite inferir que los votos por ellas depositados y los registros que los consignan no corresponden a la realidad electoral, en cuanto provienen de una actividad ilegítima consistente en falsear la residencia electoral de quienes actuaron como electores. Con todo, la interpretación del artículo 316 de la Constitución Política permite inferir que la nulidad de la elección por trasteo de votos solo se configura si se demuestran los siguientes supuestos: 1) Que los inscritos no residan en el Municipio donde se inscribieron para las elecciones. 2) Que los inscritos ciertamente votaron en las elecciones, y 3) Que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final, pues de lo contrario, la nulidad del voto resulta inocua."⁽³⁾

¹ "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

² "7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción"

³ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta - M.P. Darío Quiroz Ballea. Demandado: Alcaldía Municipal de Barbosa. Demandante: [Nombre].

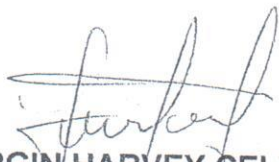
Concordante con el precedente jurisprudencial, el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad administrativa en esta materia y para responder al acceso a la información y garantías del debido proceso administrativo electoral, profirió la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019⁽⁴⁾, estableciendo expresamente en el artículo segundo de la parte resolutive, lo siguiente:

“PUBLICACION DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA: *En cumplimiento del artículo 41 de la ley 1475 de 2011, una vez concluya el escrutinio de mesa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E-14 y formulario E-11. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la publicación total ordenada anteriormente.”* (Negrilla y subrayo fuera de texto)

En consecuencia y considerando que a la fecha no se evidencia la publicación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de las imágenes y/o los archivos del formulario E-11 del municipio de Barbosa (Santander), invoco el suministro de la referida información documental dentro los términos de ley, para de esta manera proteger los derechos Constitucionales de i) petición, ii) debido proceso, iii) acceso a la administración de justicia y iv) elegir y ser elegido.

Recibo notificaciones en la carrera 8 No. 7-78 de Barbosa o correo electrónico yorcel@hotmail.com celular 310 304 8140

Atentamente,


YORGIN HARVEY CELY OVALLE
C.C. No. 91.015.156 de Barbosa

Barbosa Santander, noviembre 28 de 2019

Señores

DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN SANTANDER
Calle 35 No. 17-56 Piso 11
Bucaramanga

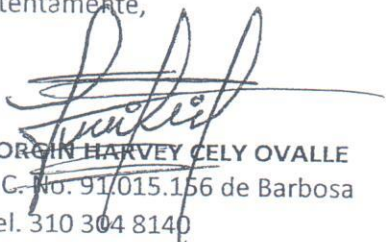
Asunto: Solicitud copia de formatos E-10 elecciones 27-10-2019 en Barbosa Santander

YORGIN HARVEY CELY OVALLE, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.015.156 de Barbosa, en mi calidad de ex candidato a la alcaldía del municipio de Barbosa Santander, acudo ante su despacho y en aras de adelantar acciones constitucionales, respetuosamente solicito se alleguen al correo electrónico yorcel@hotmail.com copia de los formatos E-10 de las 74 mesas de votación, de las pasadas elecciones regionales celebradas el 27 de octubre del año en curso, correspondientes al municipio de Barbosa Santander, información que requiero de carácter urgente, debido a los términos para presentar las acciones antes mencionadas.

Lo anterior en ejercicio del derecho de acudir a la administración de justicia de manera pronta y oportuna, una vez revisada la ley 1712, no se encuentra prohibida su expedición.

Agradezco la atención a la presente, en espera de pronta y oportuna respuesta, la cual puede ser enviada al correo electrónico yorcel@hotmail.com

Atentamente,



YORGIN HARVEY CELY OVALLE
C.C. No. 91/015.156 de Barbosa
Cel. 310 304 8140

Recibi: Diana Ruiz
Hora: 12:36
Fecha: 29/11/2019



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

Bucaramanga, 10 de diciembre de 2019

DELEGACION DE SANTANDER
CORRESPONDENCIA ENVIADA
002702
2019/12/11 10:27:04
REMITE : ROQUE ALIRIO MARTINEZ SANTOS
DESTINATARIO : YORGIN HARVEY CELY
2019002702

Señor
YORGIN HARVEY CELY OVALLE
Carrera 8 No. 7-78
Correo Electrónico yorcel@hotmail.com
Barbosa– Santander. –

Asunto: Respuesta a Derecho de Petición

En atención a su petición presentada bajo el radicado interno No. 3077 y 3107 en este Despacho, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

1. De conformidad a lo estipulado en el Artículo 18 de la ley 712 de 2014; *“El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado. fundamento constitucional que ordenan los Artículos 2,4 y 13 de la ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Sentencia C-1011 de 2008 **información sensible.***

De otro lado se negará la entrega del formulario E-10 y E-11 en atención a la reserva legal contenida en el artículo 213 del decreto 2241 de 1986, Código Electoral. Inciso segundo, que enuncia: *“Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros. **Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica.***

De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría.

Es importante precisar que en ningún caso podrán ser entregados los archivos de inscripción, ni de manera, física, fotocopiado, escaneado, fílmico, magnético o cualquier otro medio electrónico, con los nombres y números de cédulas de los inscritos, o del **Censo Electoral** de la correspondiente circunscripción vigente a los peticionarios, a diferencia de las autoridades investigativas o entes de control que adjunten la respectiva orden judicial, Acto Administrativo o Auto equivalente.

Cordialmente,

ROQUE ALIRIO MARTINEZ SANTOS
Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Santander

Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Santander Nit 8999999-040-4
Calle 35 No. 17-56 Piso 11 – Bucaramanga - (07)6339424 - C.P. 680006 – www.registraduria.gov.co

“Colombia es democracia, Registraduría su garantía”



**REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

DDS

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2019

Doctor
YORGIN HARVEY CELY OVALLE
Carrera 8 No. 7-78
Barbosa, Santander

DELEGACION DE SANTANDER
CORRESPONDENCIA ENVIADA
002541
2019/11/20 15:16:31
REMITE : MANUEL RUALES-ORLANDO CABALLER
DESTINATARIO : YORGIN HARVEY CELY OVALLE
2019002541

Asunto: Respuesta peticion

En atención a su peticion presentada bajo el radicado interno No. 2784 en este Despacho, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

1. De conformidad a lo estipulado en el Artículo 18 de la ley 712 de 2014; *"El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado. fundamento constitucional que ordenan los Artículos 2,4 y 13 de la ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Sentencia C-1011 de 2008 información sensible.*

Fundamento jurídico del Artículo 213 Inciso segundo, del Decreto 2241 DE 1986- Código Electoral que enuncia: *"Toda persona tiene derecho a que la Registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros. Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica.*

De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría.

Es importante precisar que en ningún caso podrán ser entregados los archivos de inscripción, ni de manera, física, fotocopiado, escaneado, filmico, magnético o cualquier otro medio electrónico, con los nombres y números de cédulas de los inscritos, o del **Censo Electoral** de la correspondiente circunscripción vigente a los peticionarios, a diferencia de las autoridades investigativas o entes de control que adjunten la respectiva orden judicial, Acto Administrativo o Auto equivalente.

Cordial saludo,


MARTHA PORTILLA SUAREZ
Delegada del Registrador Nacional del Estado Civil en Santander

Edna Eliana Suarez Gomez/ Coordinación Electoral

Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Santander
Calle 35 No. 17-56 Piso 11 – Bucaramanga - (07)6339424 - C.P. 680006 – www.registraduria.gov.co

"Colombia es democracia, Registraduría su garantía"

JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Vélez, veinticuatro (24) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

RDO: 68861318400120190012100

Se ha repartido a este Juzgado la acción de tutela presentada por Yorgin Harvey Cely Ovalle contra la Organización Electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander, por la presunta violación de derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

A primera vista diríase que este Juzgado debe sustraerse del conocimiento de la tutela y enviarla por competencia a la Sala Civil Familia Laboral del honorable Tribunal Superior de San Gil, siguiendo el mandato del artículo 1º, num. 3º del Decreto 1983 de 2017 que asigna por regla de reparto las acciones constitucionales que versen, entre otras autoridades, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

Empero, la Corte Constitucional, al resolver conflictos de competencia suscitados entre Juzgados del Circuito y Tribunales Superiores o Administrativos, ha dicho, una y otra vez, que:

“3. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que la aplicación de las normas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000¹, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En ese sentido, ha reiterado esta Corte que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto².

Dichas reglas fueron compiladas en el Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y recientemente modificadas por el Decreto 1983 de 2017 “por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del

¹ El Decreto 1382 de 2000 fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de 2015, norma que a su vez y en virtud de su carácter compilatorio, consagró en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. las disposiciones de naturaleza reglamentaria relacionadas con las reglas de reparto de las acciones de tutela.

² Autos 170A de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-157 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A-167 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A-124 de 2009, entre otros.

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

En razón a ello, el parágrafo segundo del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.”

Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones conservan la naturaleza de reglas de reparto en las acciones de tutela. En esa medida, no definen reglas de competencia en materia de tutela y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza³”.

Concluyendo de esa interpretación que la autoridad competente para resolver la acción de tutela, *“es a quien primero le fue repartida la misma.”*⁴.

Así las cosas, atendiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y su carácter vinculante, este Despacho Judicial la admitirá y procederá a darle el trámite pertinente.

En cuanto a la medida provisional reclamada por el accionante, para que de conformidad con el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 se ordene a las entidades accionadas que le permitan *“la toma de fotografías o en su defecto la toma manual de los datos (Nombres, apellidos y número de cédula) de los electores”*, considera el Despacho que *prima facie* no se evidencia que la cautela sea manifiestamente necesaria y urgente para conjurar una flagrante vulneración *iusfundamental*; además de que la medida presupone el análisis de la presunta violación de derechos fundamentales que alega el actor, aspectos sobre los que deberá pronunciarse el Juzgado en el fallo definitivo. Por consiguiente, la medida será denegada.

Por lo expuesto, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Vélez, Santander,

RESUELVE

Primero: Admitir a trámite la acción de tutela presentada por Yorgin Harvey Cely Ovalle contra la Organización Electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Santander.

Segundo: Vincular a los terceros interesados que participaron como candidatos y votantes en los comicios electorales celebrados el 27 de octubre de 2019 para

³ Auto 305 del 23 de mayo de 2018.

⁴ Ibídem.

los cargos de Gobernador de Santander, Diputados a la Asamblea Departamental de Santander, Alcalde Municipal y Concejales Municipales, en Barbosa, Santander.

Tercero: Notificar a las autoridades accionadas y a los vinculados para que en el término de tres (3) días den respuesta a los hechos y pretensiones contenidos en el escrito de tutela. De igual manera, solicítase al doctor Hernán Penagos Giraldo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, en la avenida calle 26 N° 51-50 CAN de Bogotá, D.C., correo electrónico cnenotificaciones@cne.gov.co; al doctor Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil, en la avenida calle 26 N° 51-50 CAN de Bogotá, D.C., correos electrónicos notificacionjudicial@registraduria.gov.co y notificaciontutelas@registraduria.gov.co; al doctor Nicolás Farfán Namén, Registrador Delegado en lo Electoral, en la avenida calle 26 N° 51-50 CAN de Bogotá, D.C., correo electrónico notificaciontutelas@registraduria.gov.co; y a los doctores Martha Portilla Suárez y Roque Alirio Martínez Santos, Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Santander, en la calle 35 N° 17-56, Piso 11 de Bucaramanga, Santander, correos electrónicos gerenciath@registraduria.gov.co y notificaciontutelas@registraduria.gov.co, que en el mismo término expliquen:

1. ¿Por qué no aparecen publicadas las imágenes y los archivos planos de los *“¿FORMULARIOS E-11” de las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral de Barbosa, Santander, correspondientes a las elecciones realizadas el domingo 27 de octubre de 2019, conforme lo dispone el artículo 2° de la Resolución 1706 del 08 de mayo de 2019?*
2. ¿Por qué los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Santander negaron la entrega de los Formularios E-11 de las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral de Barbosa, Santander, correspondiente a las elecciones realizadas el domingo 27 de octubre de 2019, a Yorgin Harvey Cely Ovalle, en la respuesta 2019002702 del 10 de diciembre de 2019, siendo que el Consejo Nacional Electoral, al resolver una consulta sobre la publicidad del citado E-11, radicada bajo el número 2629 del 08 de julio de 2014, conceptuó que *“el Formulario E-11, Acta de Instalación y Registro General de Votantes, por no encontrarse sujeto a reserva puede ser consultado en los términos que establece el C.P.A.C.A y demás normas concordantes”?*
3. ¿De qué manera puede acceder el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle a la información contenida en los Formularios E-11 de las zonas, puestos y mesas de la circunscripción electoral de Barbosa, Santander, correspondiente a las elecciones realizadas el domingo 27 de octubre de 2019?

Por Secretaría, envíense las comunicaciones del caso.

Tercero: Notificar personalmente al promotor de la acción de tutela por el medio más expedito. Envíesele comunicación.

Cuarto: Ordenar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que publiquen en su página web esta providencia para que los terceros interesados que han sido vinculados puedan intervenir dentro de la presente actuación. Envíese comunicación.

Quinto: Decretar las demás pruebas que sean necesarias para esclarecer los hechos que han dado lugar a la acción de tutela.

Sexto: Denegar la medida provisional solicitada por el accionante, por las razones puntualizadas en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE

El Juez,



JORGE BENÍTEZ ESTÉVEZ